



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL**

Medellín, veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE	Gerardo De Jesús Duque Gómez
DEMANDADAS	Colpensiones
LITISCONSORTE	Industrias de Acero S.A.S
ORIGEN	Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín
TIPO DE PROCESO	Ordinario
RADICADO NACIONAL	050013105016201900689-01
ASUNTO	Apelación de auto que denegó el decreto de práctica de prueba
DECISIÓN	Revoca y deja sin efectos lo actuado a partir del auto que resolvió sobre el derecho de pruebas.

En la fecha señalada, la Sala Sexta de decisión Laboral, integrada por las Magistradas **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**, **ADRIANA CATHERINA MOJICA MUÑOZ** y la Ponente **MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**, al tenor de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, dentro del proceso ordinario laboral promovido por **GERARDO DE JESÚS DUQUE GÓMEZ** contra **COLPENSIONES**, al cual se vinculó a INDUSTRIAS DE ACERO S.A.S., se resuelve recurso de apelación frente a la decisión adoptada por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, el 22 de marzo de 2023, mediante la cual se negó el decreto de una prueba.

**I. ANTECEDENTES**

**Pretensiones de la demanda<sup>1</sup>**

El señor GERARDO DE JESUS DUQUE GÓMEZ formuló demanda ordinaria contra COLPENSIONES pretendiendo se declare i) Reconocimiento y pago de

<sup>1</sup> 01PrimerInstancia; 03ExpedienteFisicoDigitlizado.pdf 2/4

la pensión de vejez a partir del 21 de diciembre de 2018 ii) intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o en subsidio la indexación de las mesadas iii) Costas y agencias en derecho.

Fundamento sus pretensiones en que nació el 21 de diciembre del 1956, por lo que cumplió con la edad mínima para obtener la pensión el 21 de diciembre de 2018. Laboró en la empresa INDUSTRIAS DE ACERO S.A.S desde el 7 de marzo de 1977 hasta el 9 de mayo de 1986, según consta en el certificado laboral expedido por la directora de recursos humanos el 08 de julio de 2010; solicitó a Colpensiones corrección de historia laboral, sin obtener respuesta, sin embargo en historia laboral del 04 de abril de 2016 se actualizó el tiempo parcialmente su tiempo con dicho empleador, razón por la cual nuevamente solicitó corrección de historia laboral el 09 de julio de 2018, la cual fue resuelta mediante comunicación del 23 de agosto 2018 le indicaron que Industrias de Acero S.A.S., realizó cotizaciones a su nombre por los periodos que se reflejan en su historia laboral, indicándole que debía probar la relación laboral con el empleador IDEACE. Solicitó a su empleador los soportes de pago, indicándole su empleador que no contaba con ellos al no conservar la información de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 962 de 2005.

El 15 de marzo solicitó a COLPENSIONES reconocimiento y pago de pensión de vejez, la cual fue negada el 10 de junio de 2019 mediante SUB 146360 de 2019 por no acreditar el requisito de semanas cotizadas. El 2 de julio de 2019, interpuso recurso de reposición en subsidio de apelación, confirmando lo decidido mediante resolución SUB 202993 del 30 de julio y DPE 8480 del 26 de agosto del 2019. No se le tienen en cuenta en la historia laboral 212,14 semanas de cotización con IDEACE con las que obtendría más de las 1300 requeridas para tener derecho a la pensión

### **Oposición a las pretensiones de la demanda**

**COLPENSIONES.**<sup>2</sup> Se opuso a todas y cada una de las pretensiones, sostuvo que el demandante no cumple con todos los requisitos exigidos por el Sistema pensional, pues solo cuenta con 1.217 semanas cotizadas, siendo necesario conforme a disposiciones del sistema, para efectos del reconocimiento pensional, además de contar con la edad, acreditar 1.300 semanas cotizadas. Excepcionó: Inexistencia de la obligación de reconocer pensión de vejez, falta

<sup>2</sup> 01PrimerInstancia; 04MermorialContestaciónColpensiones07-07-2020

de legitimación en la causa por pasiva, buena fe, prescripción y/o caducidad de la acción, imposibilidad de condena en cosas e innominada o genérica. Solicitó como prueba el decreto de documental, ratificación de documentos aportador por INDUSTRIAS DE ACERO S.A.S e interrogatorio de parte.

**INDUSTRIAS DE ACERO S.A.S.**<sup>3</sup> Aceptó los extremos temporales de la relación laboral e indicó que el trabajador siempre estuvo afiliado al Instituto de Seguros Sociales en iguales condiciones que sus compañeros de trabajo. Mencionó que, en los años 90s, el ISS empezó a contratar con firmas especializadas en sistemas de digitación de los listados o archivos físicos de las cotizaciones mensuales de todos los afiliados. Aclaró que esa digitación enfrentó múltiples dificultades debido a la dispersión de la información de los afiliados y la ausencia de archivos organizados que garantizaran la conservación de los listados que contenían los datos de los cotizantes, presentándose dificultades con los afiliados antiguos al momento de aclarar vacíos o inconsistencias en las historias laborales, que siempre estuvieron bajo el cuidado y conservación del ISS. Señaló que no cuenta con información de suspensión del contrato del demandante, ni obra prueba del incumplimiento de las obligaciones con ninguno de los trabajadores, pues no existe ningún reclamo, investigación o cobro coactivo sobre aportes en mora por parte del Instituto de Seguro Social, obligación a cargo del sistema pensional, dadas las facultades de cobro coactivo que siempre tuvo el Seguro Social y hoy conservan tanto COLPENSIONES como las otras administradoras de pensión.

Excepcionó: responsabilidad exclusiva del ISS (hoy COLPENSIONES) por no haber efectuado ninguna acción de cobro coactivo, ante la hipotética o supuesta mora en el pago de los aportes por parte de INDUSTRIAS DE ACERO S.A.S. “IDEACE”, improcedencia de un nuevo pago o doble cotización pensional, y cumplimiento por parte de INDUSTRIAS DE ACERO S.A.S de los periodos de conservación de documentos y contabilidad de las sociedades comerciales. Solicitó como pruebas documentales, testimoniales e interrogatorio de parte.

#### **Decisión objeto de recurso<sup>4</sup>**

El 22 de marzo de 2023 se llevó a cabo audiencia regulada por el artículo 77 del CPTSS, y en la etapa de decreto de pruebas, el A-quo denegó la

---

<sup>3</sup> 01PrimerInstancia; 12MemorialContestaciónIDEACE08-07-2022

<sup>4</sup> 01PrimerInstancia; 15AudienciaArts.77y80CPTSS. Minuto.10:19

testimonial tanto la deprecada por la parte demandante como la del apoderado de INDUSTRIAS DE ACERO S.A.S por no cumplir con lo dispuesto en el artículo 212 del CGP, por no señalar cuáles son los hechos objeto de prueba y si bien el único objeto de prueba, son los pagos de la seguridad social, ello no puede probarse a través de prueba testimonial.

### **Recurso apelación**

Inconforme con la decisión adoptada, **el apoderado de INDUSTRIAS DE ACERO S.A.S**<sup>5</sup> formuló recurso de apelación, argumentando que en Colombia no existe tarifa legal e indicó que no se puede ignorar que por remisión del artículo 145 el estatuto procesal laboral puede hacer referencia al artículo 165 del CGP que define los medios de prueba, señalando que todos los medios de prueba son válidos, pertinentes, pertinentes y conducentes y será el Juez quien le dará la valoración pertinente. Refirió que hubo una interpretación errónea al indicarse que la única prueba para acreditar la afiliación y pago al ISS es la prueba documental, pues no se está en presencia de un sistema de tarifa legal. Por lo que solicito se revoque la decisión del A Quo.

Por su parte, el apoderado de **COLPENSIONES**<sup>6</sup> formuló recurso de reposición, advirtiendo que si bien concuerda con el Juez respecto de la improcedencia de la prueba solicitada, lo cierto es que eventualmente se podría declarar en segunda instancia la nulidad de todo lo actuado y para evitar tal situación solicita se reponga la decisión.

El Juez A Quo se ratificó en lo decidido aduciendo que nunca ha visto un testigo que declare sobre la afiliación y pago de cotizaciones y de existirlo él no le creería, indicando que tampoco repone la decisión en relación con lo indicado por Colpensiones, pues para tal efecto el artículo 330 del CGP dispone la practica de la prueba por parte del Tribunal Superior de Medellín, en segunda instancia, de tal modo concedió el recurso de apelación en el efecto devolutivo y procedió a dictar sentencia de primera instancia, la cual fue recurrida tanto por la parte demandante como por la codemandada IDEACE S.A.S.

---

<sup>5</sup> 01PrimeraInstancia; 15AudienciaArts.77y80CPTSS. Minuto.14:31

<sup>6</sup> 01PrimeraInstancia; 15AudienciaArts.77y80CPTSS. Minuto.17:16

### **Alegatos de conclusión en segunda instancia**

Concedido el término para alegar de conclusión en esta sede. Solo la codemandada IDEACE S.A.S., lo recorrió oportunamente indicando en lo que interesa al decreto de prueba que erró el juez al no recibir los testimonios deprecados por cuanto los solicitó en debida forma, además de no existir tarifa legal respecto del hecho que se pretende probar -pago correcto de los aportes de sus trabajadores y desorden del ISS hoy Colpensiones-.

Las demás partes se abstuvieron de recorrer el traslado.

Esta Sala para resolver, se permite formular las siguientes,

## **II. CONSIDERACIONES**

En primera medida, la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad con el Art. 57 de la Ley 2ª de 1984 y los artículos 15 B-1, 65 N°4 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social: *“el que deniegue el decreto o la práctica de una prueba”*.

Según el alcance de la sustentación del recurso de apelación, el problema jurídico a resolver en esta sede consiste en determinar, si en el presente caso es procedente o no acceder a la prueba testimonial solicitada por INDUSTRIAS DE ACERO S.AS.

### **a) Sobre la aplicación del artículo 212 del CGP en materia laboral.**

Debe indicarse en primer lugar que la Carta Política consagra como derecho fundamental el debido proceso, en virtud del cual, los ciudadanos tienen derecho a que, en las actuaciones judiciales o administrativas en los que intervengan, se respeten las formas propias de cada juicio, así como a presentar pruebas y a controvertir las que presenten en su contra.

Así, bajo esta prerrogativa, toda persona inmersa en un proceso o procedimiento, tiene derecho a utilizar todos los medios probatorios pertinentes

que resulten necesarios para acreditar los hechos que sirven de fundamento a su pretensión o a su defensa.

Dentro de los medios probatorios establecidos por el legislador para ejercer el derecho de defensa se encuentra el TESTIMONIO, el cual, consiste, según el tratadista Jairo Parra Quijano: “*en el relato **de un tercero** al juez sobre el conocimiento que tenga de hechos en general*”, siendo el testigo aquella persona distinta de la parte que suministra información relacionada con los hechos objeto de investigación o controversia.

Ahora, el artículo 212 del estatuto procesal, aplicado por el A Quo para denegar la testimonial solicitada por la parte demandante, prevé que “*Cuando se pidan testimonios deberá expresarse el nombre, domicilio, residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos, y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba*”.

Sobre la aplicación de las reglas procedimentales contenidas en el CGP en materia laboral, resulta oportuno traer a colación una de las diferencias más relevantes entre los procesos de carácter civil y laboral, de cara a la utilización del estatuto procesal contenido en el módulo sobre la “integración del Código General del Proceso al Proceso del Trabajo y la Seguridad Social<sup>8</sup>” emanado del Consejo Superior de la Judicatura, dispuesto como material permanente de apoyo para los jueces labores, donde se precisa que los principios labores y procesales labores, no deben ser sacrificados en virtud de las disposiciones del CGP, e incluso se resalta, deben separarse las figuras jurídicas allí previstas que sean incompatibles con los principios y normas procesales del estatuto laboral, y solo acudirse a aquellas cuando exista un vacío en la norma laboral y no sea posible acudir a lo dispuesto en el artículo 40 del CPTSS referente al principio de libertad de forma, y cuando sean compatibles con los principios del derecho que el juez laboral preside. Lo anterior en virtud del ámbito social que contemplan los derechos laborales, además de su conexión con múltiples derechos de carácter fundamental.

De otro lado, la H. CSJ en sede de tutela en STL4403 de 2019, al conocer de una acción en que la parte pasiva en el marco de un proceso ordinario, se opuso a que se decretara la práctica de la prueba testimonial de la parte

---

<sup>7</sup> Tratado de la prueba judicial el testimonio, pág. 3.

<sup>8</sup> Silvia Romero, Marcel. La integración del Código General del Proceso al Proceso del Trabajo y la Seguridad Social. Módulo de la escuela judicial Rodrigo Lara Bonilla, 2015.

actora, por cuanto esta “omitió enunciar los hechos respecto de los cuales iban a deponer los testigos”, señaló que:

*“la determinación adoptada por el Juzgado accionado, al « decretar la práctica de los testimonios», aun cuando la petición no reunía los requisitos del artículo 212 del C.G.P, se evidencia que la fundamentación de su decreto no es por amaño o capricho, pues esta soportado en la condición que tiene el Juez, como «Director del Proceso», criterio también invocado por el Tribunal censurado, quien después de hacer el análisis pertinente concluyó, que cuando la prueba se requiere para lograr el esclarecimiento de los hechos, debe permitirse el decreto de la práctica, conforme lo consagra el artículo 54 del C.P.L., lo que en modo alguno comporta vulneración al debido proceso de la parte demandada, en tanto que a la misma le asiste el derecho de defensa y contradicción en la etapa subsiguiente al decreto de la práctica. Por todo lo anterior, precisa esta Corporación, que las decisiones del Juzgado de conocimiento y del Tribunal en su calidad de Juez constitucional están arraigadas en argumentos que consultaron las reglas mínimas de razonabilidad jurídica y que, sin lugar a dudas, obedecieron a la labor hermenéutica propia del juez (...)” (Resaltos propios)*

También resulta de suma importancia, recabar sobre **el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades del proceso**, contemplado en el artículo 228 de la Constitución Política, el cual tiene desarrollo legal en el artículo 11º del CGP, aplicable al procedimiento laboral por remisión analógica del artículo 145 del CPTSS, en virtud del cual, se establece para el Juez la regla consistente en que al momento de interpretar las normas de carácter procesal, “...deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial...”

Así lo ha considerado la honorable Corte Constitucional, Corporación que a través de su jurisprudencia ha indicado:

*“Los jueces deben ser conscientes de la trascendental importancia que tiene el derecho procesal en cuanto a medio garantizador de los derechos materiales dentro del marco de un debido proceso. En consecuencia, el actuar general debe ser guiado por la coexistencia de estas manifestaciones normativas permitiendo que en un marco jurídico preestablecido se solucionen los conflictos de índole material.*

*Sin embargo, si el derecho procesal se torna en obstáculo para la efectiva realización de un derecho sustancial reconocido expresamente por el juez, mal haría éste en darle prevalencia a las formas haciendo nugatorio un derecho del cual es titular quien acude a la administración de justicia y*

*desnaturalizando a su vez las normas procesales cuya clara finalidad es ser medio para la efectiva realización del derecho material (art. 228).”<sup>9</sup>*

De ahí viene el especial cuidado que deben tener los jueces al analizar las peticiones que deba resolver, pues no es dable confundir el respeto a las formas procesales con un desproporcionado formalismo, lo cual ha sido calificado por el Alto Tribunal Constitucional como verdadera vía de hecho por “exceso ritual manifiesto”. Al respecto señaló: *“En conclusión, el defecto procedimental por “exceso ritual manifiesto” se presenta cuando el funcionario judicial, por un apego extremo y aplicación mecánica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva patente en los hechos, derivándose de su actuar una inaplicación de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial.”*<sup>10</sup>

Ahora, el artículo 51 del CPTSS dispone que: *“Son admisibles todos los medios de prueba establecidos en la ley, pero la prueba pericial sólo tendrá lugar cuando el Juez estime que debe designar un perito que lo asesore en los asuntos que requieran conocimientos especiales.”*, al tiempo que el artículo 53 del mismo estatuto procesal indica;

*“El juez podrá, en decisión motivada, rechazar la práctica de pruebas y diligencias inconducentes o superfluas en relación con el objeto del pleito. En cuanto a la prueba de testigos, el juez limitará el número de ellos cuando considere que son suficientes los testimonios recibidos o los otros medios de convicción que obran en el proceso.”*

Con forme a lo anterior, se tiene que en efecto son admisibles todos los medios de prueba, siempre y cuando el hecho no requiera una solemnidad ad sustanciam actus para su demostración, situación que no se presenta respecto de la afiliación y pago de aportes al sistema de seguridad social en pensiones, primero de cuyos actos, esta en mejor condición de probarlo Colpensiones por haber recibido del ISS, la información administrativa del actor en donde debía constar la fecha en la que se suscribió el formulario de afiliación del trabajador demandante.

---

<sup>9</sup> Sentencias T1306 de 2001, reiterada en las sentencias T-793 de 2013, T 237 de 2017, entre otras.

<sup>10</sup> Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-268 de 19 de abril de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.



Respecto de la libertad probatoria, la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de casación Laboral, en el marco de un tema probatorio que no requiere prueba solemne indicó:

*“para ese objetivo, como de manera reiterada lo ha indicado la jurisprudencia de esta Sala, no se requiere de prueba solemne, en virtud de que **tal aspecto puede acreditarse a través de cualquier medio probatorio previsto en la Ley**, el cual, el juzgador se encuentra facultado para apreciar libremente, con base en lo previsto en el artículo 61 del CPT y de la SS. (CSJ SL, 10 abr. 2013, rad. 59419, CSJ SL5857-2014, CJS SL11680-2014, entre otras.), pero siempre, tratando de identificar los aspectos relevantes de ese ejercicio de presión, además de que allí se puedan identificar los pormenores de la situación y el ejercicio del debido proceso (...)”<sup>11</sup> (negritas propias del texto)*

Ello así, resalta la Sala que no le estaba dado al A quo fijar una tarifa legal respecto de los hechos que pretende probar la parte codemandada INDUSTRIAS DE ACERO S.A.S., y mucho menos realizar una valoración anticipada de una prueba que no decretó ni recaudó, para indicar que la misma no lo llevó al convencimiento.

Pues bien, en el subilte se tiene que INDUSTRIAS DE ACERO S.A.S., afirma haber efectuado en debida forma la afiliación y pago de la seguridad social en pensiones, respecto de sus trabajadores, sosteniendo que ha sido el ISS hoy Colpensiones quien a razón de su desorden administrativo ha dejado de imputar dichos pagos en la historia laboral del demandante. Consecuentemente pretende probar su dicho a través de prueba testimonial, al estimar que no cuenta con las documentales pertinentes al no estar obligado a conservarlas en virtud del artículo 28 la Ley 962 de 2005.

Así, sin hesitación alguna se logra entender que la finalidad de la prueba testimonial era establecer la afiliación al Instituto de Seguro Social del demandante y el pago de los aportes a Seguridad Social, en su favor, bajo el sistema de liquidación de aportes ALA.

En ese entendido, no resulta razonable para esta Sala de Decisión acoger la interpretación del A Quo, pues admitirla para rechazar la prueba según las voces del artículo 212 del CGP, constituye en un *exceso ritual manifiesto*, que

<sup>11</sup> Sentencia SL4601-2018, reiterada en la sentencia SL 2256-2023, rad. 97088

impediría al demandado, el adecuado debate probatorio con el fin ejercer su derecho de contradicción y defensa, que de ningún modo se puede ver limitado por una formalidad, o valoración anticipada del medio, sin antes permitir su decreto y correspondiente práctica. Situación está que derivaría además en la afectación del derecho a la tutela judicial efectiva, por la anteposición del derecho adjetivo sobre el derecho sustancial y el prejuzgamiento, por lo que habrá de **revocarse** lo decidido.

Así las cosas, al salir avante el recurso de apelación en torno a la negativa del decreto de pruebas pertinentes y conducentes, necesario es dejar sin efectos lo actuado a partir del auto que decretó las pruebas inclusive, sin que afecte las decretadas y practicadas válidamente, para en su lugar, retome el proceso desde esa etapa, disponiendo el decreto de pruebas según lo acá ordenado.

### **III.COSTAS**

Sin costas en esta sede por haber salido avante el recurso de apelación por parte de INDUSTRIAS DE ACERO S.A.S

### **IV. DECISION DEL TRIBUNAL**

En mérito de lo expuesto, EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, EN SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL,

### **RESUELVE**

**PRIMERO: REVOCAR** la decisión proferida el 22 de marzo de 2023 por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario de primera instancia promovido por GERARDO DE JESUS DUQUE GÓMEZ contra COLPENSIONES E INDUSTRIAS DE ACERO S.A.S en cuanto denegó la práctica de pruebas, para en su lugar,

**a)** Dejar sin efectos lo actuado a partir del auto por el cual se resuelve sobre el decreto de pruebas, inclusive, de conformidad con lo dispuesto en la motiva de esta decisión para que continúe el proceso desde esta etapa, sin afectar la validez de la prueba decretada y practicada válidamente; y en consecuencia **b)**

decretar y practicar la prueba solicitada por INDUSTRIAS DE ACERO S.A.S. que versan sobre el objeto del recurso.

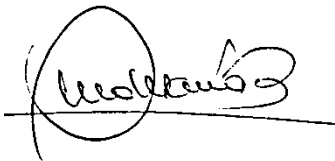
**SEGUNDO:** Sin costas en esta sede.

Se ordena notificar por estados y enviar copia de esta decisión al correo electrónico suministrado por los apoderados de las partes.

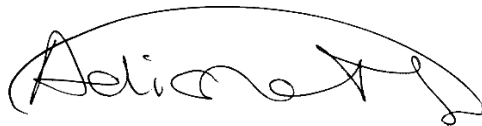
Las Magistradas,



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



ADRIANA CATHERINA MOJICA MUÑOZ

Certifico que el auto anterior fue notificado por  
ESTADOS N° 203 fijados hoy 27 de noviembre de  
2023 a las 8:00AM

\_\_\_\_\_  
El secretario